PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

Jueves de Corpus sangriento
Veinte años después

Muchos de los protagonistas del episodio murieron en la calle misma, baleados o apaleados por los *halcones*, una especie zoopolítica cuya existencia quiso ser negada, pero cuyos efectos fueron inequívocos. Muchos otros fallecieron después, perseguidos hasta en los hospitales o donde quiera que hallaran refugio. Pero otros

están vivos y persisten en su negativa de explicar lo que ocurrió el 10 de junio de 1971, ese Jueves de Corpus sangriento. Veinte años después, el entonces presidente Luis Echeverría deambula por el mundo, con la vana ilusión de que se olviden ese y otros episodios que troquelaron una imagen diversa de la que quiso fabricarse; el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, es hoy senador de la república, luego de haber sido gobernador de Nuevo León; los procuradores de la república que debieron encargarse de la investigación, porque una orden presidencial convirtió en federal un asunto del fuero común, Julio Sánchez Vargas y Pedro Ojeda Paullada, son director del Instituto Nacional de la Senectud y candidato priísta a diputado, respectivamente.

En el otro lado de la barrera se halla vigente y militante después de dos décadas de lo ocurrido, Heberto Castillo, quien hace 20 años previno a los estudiantes del peligro que se cernía sobre ellos, sigue fiel a sí mismo: anunciaba entonces la creación de un partido político y es hoy candidato a senador capitalino, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, del que es uno de los fundadores.

Aquel jueves, de Corpus Sangriento, como lo llamó Gerardo Medina hace 20 años, una marcha estudiantil fue interrumpida por una banda armada de matones, que con fusiles de alto poder, pistolas y largas varas, atacaron a los inermes muchachos, y a periodistas mexicanos y extranjeros. Provocaron la muerte de muchos de los

presentes, sin que se pudiera determinar nunca el número exacto, e hirieron a muchos más. Actuaron ante la impasibilidad de la policía, que los vio pasar como quien los conoce, y asistió a la matanza sin pestañear, como si obedeciera órdenes. Los *halcones*, jóvenes atléticos cuya conducta denotaba entrenamiento militar, fueron una banda organizada en el Departamento del Distrito Federal, al modo de los escuadrones cazacomunistas que por entonces campeaban en los países del Cono Sur, pero que también en otras partes del mundo habían sido utilizadas con fines antimodocráticos, como lo filmó Costa Gavras en *Zeta*.

Se quiso hacer creer, la noche misma de los acontecimientos, que grupos rivales de estudiantes se habían enfrentado. Pudo saberse de inmediato que no era así, pero poco más pudo saberse. Porque la investigación, que con solemnidad e insistencia ofreció el presidente Echeverría, no se realizó jamás. Y es que era innecesario, o extremadamente riesgoso, llevarla a cabo, porque practicada a derechas, como la gravedad del caso requería, hubiera significado mostrar que la matanza había sido ordenada desde el gobierno mismo.

Echeverría deslizó, en aquel momento, la responsabilidad hacia Martínez Domínguez. Le pidió, primero organizar una gigantesca concentración pro gubernamental, en apoyo del Presidente, que se realizó en el Zócalo el 15 de junio. Allí, tres jóvenes avalaron el comportamiento de Echeverría: Alfredo Bonfil, que llegaría a dirigir la Confederación Nacional Campesina y poco después moriría en un accidente aéreo, habló por los campesinos. Por el sector popu-

lar lo hizo Jorge Preisser. Y por los jóvenes obreros, Arturo Romo, que ahora es candidato por segunda vez a senador por Zacatecas. Al atardecer de ese día triunfal, Martínez Domínguez (y el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel) fue obligado a renunciar. Sin decirlo, Echeverría lo convirtió de ese modo en culpable sin castigo.

Años después, Martínez Domínguez buscó confiar su versión de los hechos a varias personas. A mí mismo, delante del ahora senador Luis Martínez, me hizo el relato que con mayores detalles narró al ingeniero Heberto Castillo, que en 1979 lo publicó en *Proceso*. La estrategia de Martínez Domínguez era impecable: al incriminar a Echeverría como autor de la matanza y exculparse a sí mismo, lo hacía de modo tal que podía en caso necesario desautorizar a quien había recibido su confidencia, consiguiendo que el efecto del relato de todos modos se produjera.

En esencia, Martínez Domínguez —el único de los protagonistas gubernamentales que hasta ahora abordó, aunque fuera por ese camino sesgado, el delicado asunto— refirió que aquel Jueves de Corpus comió en Los Pinos, como parte de una reunión en que estaban presentes también el gobernador del estado de México, Carlos Hank González, el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Roviroso, y el director de Aguas del gobierno capitalino, Raúl Ochoa. Delante de todos, Echeverría recibió durante la tarde 10 o 12 telefonemas, y por sus monólogos en el auricular todos supieron de qué se trataba, pues instruíra sobre qué hacer con los muertos y cómo reaccionar ante la prensa. Según el ahora senador de Nuevo León, el entonces subse-

cretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fue encargado por Echeverría de coordinar el operativo.

Aun si la versión de Martínez Domínguez correspondiera con la verdad, su responsabilidad personal es enorme. Por lo menos habría sido cómplice de la matanza, porque estuvo al tanto de los preámbulos, y en compañía de los funcionarios citados atestiguó su desarrollo del modo descrito. Más todavía, se empeñó en negar la existencia de los *halcones*, pretendió hacer creer que se trató de un enfrentamiento interestudiantil, y cuando renunció, admitió implícitamente ser culpado, sin atreverse a denunciar públicamente el monstruoso crimen del que después quiso deslincarse. Su estilo personal, comprobado después del breve periodo de su regencia, justificó que en juego de palabras que une su nombre con las aves rapaces que mataron estudiantes y transeúntes el 10 de junio hace 20 años, se le llame *Alconso*.

Echeverría, que no cumplió su palabra de llevar a cabo una investigación, porque no sería tan torpe como para incriminarse, parece haber decidido la operación, al margen o de acuerdo con Martínez Domínguez, con el doble propósito de mantener la presunta apertura ofrecida al comienzo de su gobierno, dentro de los límites que le eran convenientes; y para deshacerse del propio jefe del Departamento del Distrito Federal, herencia de Díaz Ordaz, con quien ya rompía entonces.

Ni modo de callar hoy. La impunidad de este crimen es loza que pesa sobre la sociedad mexicana. Y el camino para sacudírnosla de encima pasa por su ventilación abierta y sin tapujos.